



Bogotá, D.C. 29 de julio de 2024

Doctora
CLARA CECILIA SUÁREZ VARGAS
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección Tercera – Subsección B
Bogotá, D.C.

Referencia:	Medio de control:	Reparación Directa
	Radicado:	25000233600020230027600
	Demandante:	Santa Anita Napoles S.A.
	Demandado:	Ministerio del Interior y Otros
	Asunto:	Contestación de la demanda

Su Señoría,

SAMUEL ALVAREZ BALLESTEROS, mayor de edad vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.620.303 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 186.605 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado del Ministerio del Interior, por medio del presente escrito comparezco ante usted con el fin de **CONTESTAR LA DEMANDA Y SU REFORMA** citada en la referencia, en los siguientes términos:

1. PRETENSIONES

Manifiesto al Despacho que el Ministerio del Interior se opone a todas y cada una de pretensiones de los demandantes y desde ya solicito se absuelva al Ministerio del Interior de todas y cada una de las declaraciones y condenas pretendidas por el apoderado en el escrito de la demanda, pues las considero infundadas desde el punto de vista fáctico y jurídico frente a mi representada. En consecuencia, solicito su Señoría, se sirva denegarlas, toda vez que frente al asunto objeto de demanda concurren en favor de la entidad que represento la excepción previa de falta de legitimación material en la causa por pasiva, por cuanto, mi representado no participó, directa ni indirectamente en los hechos que dan lugar a la presente demanda. Sumado a esto, de conformidad con las razones de la defensa que propondré, por encontrarse probadas las excepciones: i) inexistencia de falla o falta de servicio a cargo del Ministerio del Interior, ii) inexistencia del perjuicio, iii) el hecho de un tercero y iv) innominada o genérica.

2. EXCEPCION PREVIA

FALTA DE LEGITIMIDAD MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA:

Sobre la legitimación material en la causa por pasiva es necesario recordar que el Consejo de Estado señaló lo siguiente:

*“(…) **Resulta requisito indispensable y necesario para que pueda entrabarse la relación procesal** que en la demanda se precise además de la parte demandante, la parte demandada y su representante, y en el auto admisorio se ordene su notificación y no es suficiente, a la luz de las normas citadas la precisión del acto o actos demandados y de las autoridades que las expidieron, **pues es necesario identificar debidamente la parte demandada**, la cual debe tener capacidad para ser sujeto procesal y ser su representante (…)”* Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 1989.

El mismo Consejo de Estado, ha manifestado:

*“(…) La Nación es una sola y cuando su responsabilidad por la prestación de un servicio público o el ejercicio de una potestad, y éste es prestado por dos entes diferentes - sin distinción en aspectos temporales o espaciales -, **sólo podrá actuar como representante judicial de la Nación un sólo apoderado** puesto que de conformidad con el artículo 66 del C. P. C., modificado por el artículo 1º. Numeral 24 del decreto extraordinario 2282 de 1989, aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del C.C.A., **se establece en forma omnicomprendiva y sin excepciones, que en “ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona” y que si se confiere poder a varios, el primero será el principal y los posteriores sustitutos en su orden. Porque de lo contrario se atenta contra el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política** (…).” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente No.10.367, sentencia del 6 de agosto de 1997 (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

- **La función de salvaguardar el ORDEN PÚBLICO NO está a cargo del Ministerio del Interior.**

En materia de orden público, entendido como función de garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía, es a la Policía y al Ejército Nacional como entes del Ministerio de Defensa, a quien les corresponde su control, de tal manera que el artículo 217 y 218 de la Constitución Política establece que a tales organismos les está encomendado, respectivamente, (1) la defensa del orden constitucional y (2) el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz.

Sin duda, aunque la Nación es una sola, para efectos de atribución de responsabilidad concreta se debe verificar, sin excusa, a cuál de las entidades demandadas se le imputa el deber legal de protección, defensa y seguridad, es decir, el deber de garante del derecho conculcado. Y como ya se indicó las medidas de defensa y seguridad, además de la ejecución de las mismas, están a cargo del Ministerio de Defensa, y sus entes, entre ellos, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Lo anterior, en consonancia con lo señalado en la Constitución Política Nacional y el Decreto 049 de 2003 que en su artículo primero incluye dentro de la estructura del Ministerio de Defensa a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, siendo así tales organismos parte integrante y esencial del ministerio, lo cual, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1512 de 2000 “*Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones*” tiene como una de las funciones esenciales:

*“(…) Participar en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas de defensa y seguridad nacionales, para garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio y el derecho de libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
(…)”*

Con base en lo expuesto en la demanda y de acuerdo con las competencias asignadas al Ministerio del Interior por la Constitución Política y la ley, está claro que dentro del presente proceso esta entidad cuenta con el **presupuesto excepcional falta de legitimación material en la causa por pasiva** y por ende al no existir tal legitimación, no se cumple la condición necesaria de dictar sentencia desfavorable a los intereses del Ministerio del Interior.

Con base en el artículo 18 literal c)¹, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 2893 de once (11) de agosto de dos mil once (2011) “por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”. El artículo segundo de dicho decreto describe las funciones del Ministerio del Interior en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 2o. FUNCIONES. El Ministerio del Interior, además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 cumplirá las siguientes:

1. Articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la política pública del Sector Administrativo del Interior.
2. Diseñar e implementar de conformidad con la ley las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, en coordinación con las demás entidades del Estado competentes, así como la prevención a las violaciones de estos y la observancia al Derecho Internacional Humanitario, con un enfoque integral, diferencial y social.
3. Servir de enlace y coordinador de las entidades del orden nacional en su relación con los entes territoriales y promover la integración de la Nación con el territorio y el desarrollo territorial a través de la profundización de la descentralización, ordenamiento y autonomía territorial y la coordinación y armonización de las agendas de los diversos sectores administrativos, dentro de sus competencias, en procura de este objetivo.
4. Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entidades competentes, la política pública para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de Gobierno en las administraciones locales ubicadas en zonas fronterizas.
5. Dirigir y promover las políticas tendientes a la prevención de factores que atenten contra el orden público interno, así como tomar las medidas para su preservación, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, las autoridades departamentales y locales en lo que a estos corresponda.
6. Atender los asuntos políticos y el ejercicio de los derechos en esta materia, así como promover la convivencia y la participación ciudadana en la vida y organización social y política de la Nación.
7. Promover y apoyar la generación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en las entidades territoriales.
8. Administrar el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Fonsecon- teniendo en cuenta la participación del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, según los proyectos que se presenten y de conformidad con la política que en materia de seguridad y convivencia defina el Gobierno Nacional.

¹ “**ARTÍCULO 18. FACULTADES EXTRAORDINARIAS.** De conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para: (...)”

c) Modificar los objetivos y estructura orgánica de los Ministerios reorganizados por disposición de la presente ley, así como la integración de los sectores administrativos respectivos (...)”

Oficio del 29/07/2024

9. *Administrar el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia, el Fondo de Protección de Justicia y el Fondo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas.*

10. *Formular y hacer seguimiento a la política de los grupos étnicos para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.*

11. *Formular y hacer seguimiento a la política de atención a la población LGBTI para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.*

12. *Formular y hacer seguimiento a la política de atención a la población en situación de vulnerabilidad, para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.*

13. *Coordinar, con el concurso de los demás ministerios, la agenda legislativa del Gobierno Nacional en el Congreso de la República y las demás entidades del orden nacional.*

14. *Servir de órgano de enlace, comunicación y coordinación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa.*

15. *Coordinar con las demás autoridades competentes el diseño e implementación de herramientas y mecanismos eficientes en materia electoral que busquen garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales.*

16. *Formular y promover las políticas públicas relacionadas con la protección, promoción y difusión del derecho de autor y los derechos conexos. Así mismo, recomendar la adhesión y procurar la ratificación y aplicación de las convenciones internacionales suscritas por el Estado colombiano en la materia.*

17. *Incentivar alianzas estratégicas con otros gobiernos u organismos de carácter internacional, que faciliten e impulsen el logro de los objetivos del Sector Administrativo del Interior, en coordinación con las entidades estatales competentes.*

18. *Las demás funciones asignadas por la Constitución y la ley.”*

De manera diáfana se logra demostrar que el Ministerio del Interior no tiene ninguna competencia atribuida por la Constitución Política o la ley que permita imputarle el daño sufrido por los demandantes ante los perjuicios ocasionados por los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021.**

Se resalta el numeral segundo contenido en el Decreto Ley 2893 de 2011 para decir que, si bien esta es la norma que utiliza la apoderada de los actores para solicitar la vinculación del Ministerio del Interior, no se logra hacer el juicio de imputación necesario para, siquiera, concluir en la necesidad de que el Ministerio del Interior deba ser mantenido como sujeto procesal demandado dentro del expediente.

En este orden de ideas, las competencias atribuidas por la ley en materia de diseño e implementación de políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos y preservación del orden público, es como su nombre lo indica, de carácter político administrativo y no de carácter operativo. Para un mejor entendimiento del despacho, se explica que la competencia de diseño de políticas públicas para la prevención, respeto y garantía de los derechos humanos se realiza con el fin de que

Oficio del 29/07/2024

las entidades del Estado encargadas de proteger real y efectivamente los derechos humanos, puedan ejercer su labor de manera más organizada, eficiente y garantista.

Concordante con lo anterior, el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes, conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciban del Presidente de la República.

• LA FUERZA PÚBLICA EN COLOMBIA

La fuerza pública está conformada por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional, las cuales ejercen el monopolio de la fuerza de manera legítima; es decir, actúan dentro de la legalidad.

Las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, organismos encargados de velar por la defensa y el orden de la Nación.

Entre sus funciones prioritarias se encuentran las que demanda la Constitución del año 1991, tales como velar por la defensa del territorio, de la soberanía, de la independencia, así como velar por el mantenimiento del orden constitucional.

La Policía Nacional, por su parte, es la encargada de mantener el orden público interno, es un cuerpo armado al igual que las Fuerzas Armadas, pero es de naturaleza civil.

Entre sus funciones principales está la del mantenimiento del orden y las condiciones necesarias para el libre ejercicio del derecho y las libertades públicas, el asegurar a los individuos una convivencia pacífica dentro del territorio nacional y guardar el orden público interno; es decir, perseguir y capturar a los delincuentes.

Hay tres características especiales que tiene la fuerza pública para lograr un efectivo desarrollo de sus funciones:

1. La fuerza pública no es deliberante; es decir, no se puede sindicalizar, no se puede reunir fuera del orden de la autoridad legítima, sus miembros no pueden sufragar mientras estén activos en el servicio y en ningún caso pueden intervenir en actividades de partidos políticos.

2. La **fuerza pública está obligada a la noción de obediencia debida; es decir, los miembros de grados inferiores deben siempre obedecer las órdenes de su superior inmediato** (sólo en el caso de la fuerza pública, nunca en el de los civiles); sin embargo, las órdenes que vayan en contra de los derechos humanos pueden ser alegadas por el subalterno.

3. La fuerza pública goza del fuero militar; es decir, ésta no responde ante la justicia penal ordinaria, sino que lo hace ante los tribunales militares.

De las normas resaltadas anteriormente, así como de los hechos, base de esta demanda, no se encuentra que exista relación de causalidad, entre las funciones que legalmente desarrolla el Ministerio del Interior y la afectación económica que indica sufrir la Empresa demandante como consecuencia del denominado Paro Nacional del 2021.

Por ende el Ministerio del Interior, al no encontrarse dentro de sus funciones el control del orden público, además de que el señalado paro fue eminentemente de inconformidad general de la ciudadanía, el Ministerio del Interior no se encuentra legitimado en la causa material por pasiva para entrar a responder material ni sustancialmente de los perjuicios que el demandante manifiesta haber sufrido por no poder recibir los insumos que necesitaba para el desarrollo de su actividad, ni el poder enviar desde sus lugares de producción los huevos, pollos y demás elementos que mediante su actividad constituyen fuente y resultado de su labor.

Oficio del 29/07/2024

Por todo lo anterior, solicito muy respetuosamente a su Señoría declarar la FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA en favor del Ministerio del Interior.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Su señoría invoco como fundamentos de derecho los siguientes:

- **Normativa**

Constitución Política, 2, 90, 217, 218

Ley 489 de 1998

Decreto 1512 de 2000 *“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”*.

Decreto Ley 2893 de 2011 *“Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”*.

Decreto 4065 de 2011 *“Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura.”*

- **Jurisprudencia:**

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 1989.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de octubre 11 de 1990.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente No.10.367, sentencia del 6 de agosto de 1997.

Consejo de Estado, sentencia de abril 26 de 2001, Expediente 12537, C.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010. Expediente No. 19287. C.P. Ruth Stella Correa Palacio

Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 28 de Julio de 2011 Expediente (19753), *M. P. Mauricio Fajardo Gómez*.

Consejo de Estado Sección Tercera Sentencia del 27 de septiembre de 2013. Expediente 28711 C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Consejo de Estado, sentencia de veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015), expediente No. 33692. Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón (E).

Oficio del 29/07/2024

Consejo de Estado Sentencia de Unificación N° 85001-33-33-002-2014- 00144-01 (61.033) 29 de enero de 2020.

Consejo de Estado Sección Tercera en sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021) con Radicación número: 08001-23-31-000-2001-01676-01(39063) Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

4. RAZONES DE LA DEFENSA

Su señoría a pesar que considero que lo que se ha desarrollado hasta aquí debe prosperar, entro a defender la demanda, así:

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver es: conforme a sus competencias: **¿La demandada NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR debe responder por los presuntos perjuicios sufridos por la sociedad demandante en hechos ocurridos durante el paro nacional del 2021?**

4.2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

“IV. HECHOS RELEVANTES GENERALES”

HECHO 1: Parcialmente cierto, aunque las organizaciones sociales señaladas por la demandante no fueron las únicas que confluyeron en las movilizaciones y protestas. La motivación en la movilización fue pluricausal no exclusivo de la reforma tributaria.

HECHO 2: No es cierto, no fue la única ni la primera movilización social. Respecto a las afectaciones del sector avícola **a mi representada no le consta** y nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 3: Narra supuestas actuaciones de la **Camara de Comercio de Cali**, que **a mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 4: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, que **a mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 5: Es cierto, no obstante, narra actuaciones que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 6: Es cierto, no obstante, narra actuaciones que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 7: Parcialmente cierto respecto a las noticias presentadas en medios de comunicación. Por lo demás, **a mi representada no le consta** y nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 8: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 9: Narra supuestas actuaciones de empresas privadas y de **FENAVI**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 10: Narra supuestas actuaciones de empresas privadas y de **FENAVI**, el representante de **“Huevos Kikes”** que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 11: Es cierto, no obstante, narra actuaciones que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 11: Es cierto, no obstante, narra actuaciones que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 13: Narra supuestas actuaciones de empresas privadas y de **la Fuerza Pública**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 14: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 15: Narra supuestas actuaciones de la **Camara de Comercio de Buenaventura**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 16: Es cierto, no obstante, narra actuaciones del **Senado de la República**, que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 17: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 18: Narra supuestas actuaciones de **FENALCO**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del

Oficio del 29/07/2024

Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 19: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 20: Narra supuestas actuaciones de **FENALCO y Scotiabank Colpatría**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 21: A **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 22: Se refiere a datos y estadísticas sin ninguna claridad en cuanto a la fuente de donde proceden o como se calcularon, en cuanto a las actuaciones de **FENAVI a mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 23: **Parcialmente cierto**, no obstante, narra actuaciones que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 24: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 25: Narra supuestas actuaciones de **Incubadora Santader y Pronavicola S.A. y Pronavicola S.A.**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 26: Narra supuestas actuaciones investigativas del diario **el Tiempo**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 27: A **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior..

HECHO 28: **Parcialmente cierto** sobre los pronunciamientos del **Ministro de Hacienda**. Respoecto a las supuestas actuaciones de **FEDESARROLLO**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del

Oficio del 29/07/2024

proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 29: Narra supuestas actuaciones de la **Camara de Comercio de Cali y Asobancaria**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 30: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 31: Narra supuestas actuaciones del **Consejo Gremial Nacional**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 32: A **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 33: Narra supuestas actuaciones de **Consejo Gremial Nacional, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia y CAMACOL**, que a **mi representada no le consta** afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 34: Narra supuestas actuaciones de **Incubadora Santander y Pronavícola S.A.**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 35: Narra supuestas actuaciones de **Huevos Kikes**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 36: A **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 37: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI** a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 38: A **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los

Oficio del 29/07/2024

que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 39: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 41: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 42: Narra supuestas actuaciones de la **Gobernadora del Valle del Cauca y el Ministerio de Defensa**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 43: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 44: Narra supuestas actuaciones de la **Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 44: Narra supuestas actuaciones de la **Defensoría del Pueblo**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 45: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 46: Narra supuestas actuaciones de la **Incubadora Santader**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 47: Narra supuestas actuaciones de la **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 48: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los

Oficio del 29/07/2024

que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 49: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 50: Es cierto, no obstante, narra actuaciones que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 51: Narra supuestas situaciones de la **Incubadora Santader y Huevos Santa Anita – Nápoles que no son parte en este proceso**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 52: A mi representada no le consta las actuaciones y declaraciones **del Alcalde de Cali**, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 53: No es un hecho, es la cita de una norma expedida por el Presidente de la República.

HECHO 54: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 55: Narra supuestas actuaciones de la **FENALCO**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 56: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 57: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 58: Es cierto no prosperó la moción de censura contra el Ministro de Defensa.

HECHO 59: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

Oficio del 29/07/2024

HECHO 60: Parcialmente cierto, respecto a que hubo }visita de la CIDH, en lo demás son inferencias subjetivas del apoderado yno atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 61: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior

HECHO 62: Narra supuestas situaciones de **Huevos Santa Anita – Nápoles que no son parte en este proceso**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 63: Narra supuestas situaciones de **FENAVI**, que a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 64: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 65: No es un hecho, es una cita textual de una ley.

HECHO 66: No es un hecho, es una cita textual de una Resolución.

HECHO 67: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

“HECHOS RELEVANTES ESPECIFICOS FRENTE A NUTRIAVICOLA S.A.”

HECHO 68: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 69: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 70: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.
funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 71: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los

Oficio del 29/07/2024

que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 72: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 73: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 74: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 75: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 76: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 77: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 78: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 79: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 80: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 81: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 82: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

Oficio del 29/07/2024

HECHO 83: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 84: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 85: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 86: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 83: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 87: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 88: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 89: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 90: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 91: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 92: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 93: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los

Oficio del 29/07/2024

que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 94: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 95: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 96: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 97: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 98: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 99: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 100: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 101: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 102: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 103: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 104: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

4.3 EXCEPCIONES DE FONDO

4.3.1 *Inexistencia de falla o falta de servicio a cargo del Ministerio del Interior*

Respecto la Responsabilidad del Estado por daños a la propiedad en manifestaciones, el honorable Consejo de Estado Sección Tercera en sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021) con Radicación número: 08001-23-31-000-2001-01676-01(39063) Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE, señaló:

“El artículo 1 de la Ley 62 de 1993, en consonancia con los artículos 2 y 218 CN, dispone que la Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

El presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, dirige la fuerza pública (artículo 189.3 CN) y le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo cuando sea perturbado (artículos 189.4 y 213 y siguientes CN). A su vez, el gobernador es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público (artículo 303 CN). En consonancia, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y le corresponde conservar el orden público de éste, de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del presidente de la República y del gobernador (artículo 315.2 CN).

*La jurisprudencia, en vigencia del artículo 16 de la Constitución de 1886 -que corresponde al citado artículo 2 CN- **concluyó que estos deberes no implican que el Estado sea un “asegurador general” contra daños, tampoco entrañan una responsabilidad automática** derivada exclusivamente de la afectación de un derecho y encuentran su límite en los recursos materiales y humanos de que disponen las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la seguridad e integridad. Se trata, pues, de una falla relativa del servicio9.*

*Imputar responsabilidad al Estado con base en disposiciones generales como la contenida en el artículo 2 CN **supondría la existencia de una obligación, en términos jurídicos, en la cual debe responder por todos los daños que sufran las personas**. Esa norma contiene un deber general, del cual, de forma abstracta o general, no pueden derivarse directamente obligaciones resarcitorias. Si no fuese así, el Estado respondería siempre que una persona le cause daño a otra, con independencia de su intervención en el hecho, lo cual constituye, evidentemente, una distorsión que aleja al juez de la Administración de los fundamentos civiles de la responsabilidad extracontractual del Estado, **para -en su lugar- ubicarlo en los predios ajenos de la responsabilidad política**.*

*En esta materia se requieren análisis más precisos soportados en normas destinadas a regular la responsabilidad, que impongan verdaderas obligaciones resarcitorias en términos civiles, y no estén fundados en disposiciones que fueron concebidas para establecer fines relacionados con la organización del Estado. **Por tanto, las entidades públicas solo son responsables civilmente cuando con su acción u omisión causen un daño** a otro (art. 2341 CC), pues solo en esos eventos puede surgir la obligación indemnizatoria. (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

Según la demanda, la Nación-Ministerio del Interior, incurrió en falla del servicio por omisión al deber de protección por los bloqueos de vías, disturbios, vandalismo el saqueo y la destrucción de la propiedad privada de sede de la sociedad **NUTRIAVICOLA S.A.**

Es pertinente precisar que de acuerdo con la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, los elementos para declarar la responsabilidad del Estado son dos: **i)** La existencia de un daño antijurídico, y **ii)** que ese daño antijurídico pueda ser imputado a una entidad o entidades del Estado. Dice la jurisprudencia:

“A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la atribución de la respectiva lesión; en consecuencia, ‘la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política’. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

Al respecto, esta Sección ha sostenido que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas” (Negritas y subrayado por fuera del texto original) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.

Oficio del 29/07/2024

Con base en lo expuesto, se tiene que una vez se tenga demostrado la existencia del daño antijurídico, esto es que el sujeto pasivo o las víctimas no estén en el deber jurídico de soportar, se debe proceder a hacer lo que se denomina la imputación del daño antijurídico.

Esta imputación del daño supone dos etapas; una primera denominada por la jurisprudencia como imputación fáctica, consistente en realizar un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación, y una segunda denominada imputación jurídica en la cual, a través de un estudio estrictamente jurídico, se determina si la entidad demandada debe resarcir los perjuicios por la verificación de una falla, la concreción de un riesgo excepcional o la ocurrencia de un daño especial.

La doctrina especializada, ha establecido que esta visión del Consejo de Estado de manera concreta supone en realidad, no dos, sino tres elementos para la estructuración de la responsabilidad extracontractual del Estado, así:

- 1) La existencia de un daño antijurídico
- 2) La imputación del daño a un agente estatal (lo que el Consejo de Estado denomina imputación fáctica)
- 3) El fundamento del deber de reparar (que correspondería a la imputación jurídica de que trata la jurisprudencia)

Todo lo anteriormente expuesto sirve para sustentar que tanto la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como la doctrina especializada en el tema, aseveran que, en todo juicio de responsabilidad extracontractual del estado, es necesario demostrar el porqué del daño antijurídico padecido por los convocantes es atribuible fácticamente a cualquiera de sus agentes.

Dentro de los hechos y fundamentos de derecho, el apoderado del convocante no logró cumplir con los elementos necesarios para atribuir responsabilidad al Ministerio del Interior por los **perjuicios derivados del paro nacional**.

Como se transcribió previamente, de acuerdo con el Consejo de Estado para que el juicio de imputación se haga de manera completa, es necesario que se haga un estudio de la situación fáctica en relación con las herramientas normativas (competencias y funciones legales) que permitan su atribución a determinado agente del estado. Sin embargo, el apoderado obvió esta obligación.

En la presente solicitud de conciliación, sin sustentar fáctica ni jurídicamente su dicho, el apoderado afirma que quienes deben reparar el daño sufrido por los convocantes son todas las entidades convocadas.

Por lo expuesto ampliamente, queda en evidencia la inexistencia de acción u omisión imputable al Ministerio del Interior que derive en la generación de los perjuicios que se persiguen dentro del presente proceso.

4.3.2 Inexistencia de un daño antijurídico

Conforme a los hechos descritos por el demandante y la innegable existencia del paro nacional lo cual es un hecho de público conocimiento, al parecer del suscrito apoderado, si pudo haber algún daño sobre la empresa demandante, el mismo no alcanza a ser del orden antijurídico, toda vez que el Gobierno Nacional y entre ellos el Ministerio del Interior, actuaron dentro de sus competencias en búsqueda de la solución definitiva al paro nacional presentado, el cual no fue provocado ni promovido ni des-conocido por el Gobierno Nacional. En el mismo sentido desde antes del inicio del paro se hizo todo lo jurídica y legalmente posible para evitarlo, eso sí respetando el derecho constitucional de la protesta,

Oficio del 29/07/2024

sin embargo, la dimensiones que éste tomó no estaban en las predicciones ni del más optimista de los contradictores hubiese predicho las consecuencias y duración del mismo, a pesar que el Gobierno Nacional en todo momento buscó a través del dialogo y la concertación llegar a un acuerdo con los organizadores del paro, sin tener éxito en el mismo de manera pronta.

Igualmente el Gobierno Nacional, al tiempo que buscaba como concertar la finalización del paro nacional a través del dialogo, siempre hizo presencia en todo el país, en la medida de sus posibilidades en cuanto el número de miembros de la fuerza pública, sin dejar abandonada la población en general, claro está que atender casos concretos, como lo solicitaba seguramente la empresa demandante, se hacía aún más difícil pero aun así, como en los mismos hechos de la demanda lo confiesa el demandante, la fuerza pública a través de la policía nacional y la armada nacional, los acompañó en algunas ocasiones en caravanas y en apoyo a su seguridad.

Así pues, no hay un daño antijurídico predicable respecto del Ministerio del Interior.

4.3.3 Hecho de un tercero

Retomando lo expuesto en las pretensiones, se tiene que la parte demandante pretende que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas por los daños causados por los perjuicios materiales sufridos por los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021**.

En el asunto objeto de estudio y del presente pedido, no se deben acoger las pretensiones de la solicitud de conciliación, toda vez que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos, causados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas.

Bajo este marco, es importante destacar que los hechos por los cuales se presentaron los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021**, son ajenos a esta entidad, teniendo en cuenta que, como lo señala la misma parte actora, los hechos fueron perpetrados por actores sociales particulares.

Como podemos observar, estamos en el presente caso frente a las actuaciones atribuibles a terceros diferentes al Estado. Así mismo, se evidencia que no ha existido una actuación antijurídica atribuible a la administración en la producción del daño.

Considerando lo anteriormente expuesto, se observa que existió lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado el hecho de un tercero, al respecto se ha pronunciado el Consejo de Estado:

“A la administración le es posible exonerarse de responsabilidad si se acredita que la causa del daño fue de manera exclusiva y determinante el hecho de la víctima, el hecho de un tercero o la constitución de una fuerza mayor”²

Más precisamente sobre el hecho de un tercero se ha dicho lo siguiente:

“Se destaca en particular, para los efectos de esta providencia, que el hecho del tercero será causa extraña que exonere de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúna los siguientes requisitos:

(i) Que el hecho del tercero sea la causa exclusiva del daño, porque si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño existiría solidaridad entre éstos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344

² Consejo de Estado Sección Tercera Sentencia del 27 de septiembre de 2013. Expediente 28711 C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

del Código Civil, lo cual le dará derecho a éste para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien pague se subrogará en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención.

(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado.

(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina —sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor³

En el caso concreto se observa que:

- i) ***Que el hecho del tercero sea la causa exclusiva del daño:*** Según lo declarado en los hechos de la demanda, las presuntas actuaciones de los participantes de los bloqueos, fueron los hechos determinantes en la causación del perjuicio
- ii) ***Que el hecho de tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad:*** Acogiéndonos nuevamente a lo expuesto en los hechos de la demanda, se identifica que los actos de bloqueo de vías y disturbios en el paro nacional del 2021, fueron ejecutados por personas particulares y su Comité del Paro Nacional, ajenas a la institucionalidad.
- iii) ***Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad:*** Para el Ministerio del Interior era imposible prever la magnitud del paro y sus consecuencias, toda vez, que este inicio en el marco de una marcha pacífica. Así mismo fue irresistible para el Ministerio del Interior, toda vez que, no se encuentra en el marco funcional de esta entidad la protección de la honra y bienes privados de las personas, así como tampoco a las lesiones en su integridad personal, en otras palabras, mi mandante no tiene competencias respecto a medidas de defensa y seguridad, así como tampoco cuenta con personal de la fuerza pública. Su labor se limita como mediador entre la comunidad y el Gobierno Nacional.

- **Precedente del Consejo de Estado:**

El honorable Consejo de Estado⁴ declaró la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero de las entidades demandadas dentro de un proceso de reparación directa en el que una sociedad comercial exigía el reconocimiento y pago de perjuicios con ocasión de unos disturbios y actos vandálicos que alteraron el orden público, así :

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010. Expediente No. 19287. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

⁴ Consejo de Estado Sección Radicación número: 08001-23-31-000-2001-01676-01(39063)

“Con la perspectiva de la estrecha relación entre el derecho de reunión o movilización de personas en lugares públicos y el mantenimiento del orden público (art. 2 Decreto 1355 de 1970), el precepto disponía que la autoridad de policía no debía adelantar procedimiento alguno contra las personas que acataran sus órdenes, pero facultaba a la misma autoridad para disolver el evento si degeneraba en tumulto, desorden o agitación que afectara la tranquilidad o inseguridad. Asimismo, la autoridad debía detener a quienes infringieran las normas penales o de policía, para ponerlas a disposición del funcionario competente (arts. 104 y 107). En todo caso, la policía podía impedir manifestaciones o movilizaciones que no hubieran sido anunciadas o que no cumplieran los objetivos anunciados por los organizadores (art. 105). También, debía desmovilizar a los manifestantes, si advertía que estos portaban armas o elementos con los que pudieran causar daño a los bienes públicos o a la propiedad privada y a decomisar dichos elementos, a través del ejercicio legítimo de la coerción para el restablecimiento del orden público (arts. 29 y 106). La Constitución retoma este enfoque al disponer que se garantizan solo las reuniones y manifestaciones públicas que sean pacíficas y al deferir al legislador la limitación de su ejercicio (reserva de ley).

*El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la administración y que su acción **sea imprevisible e irresistible**.*

*El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. **La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible**. Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. **El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración**.*

Conforme a las pruebas, el 31 de agosto de 1999 hubo un paro cívico de gran magnitud en la ciudad de Barranquilla en el que se presentaron bloqueos de vías, quema de objetos e incluso el uso de armas de fuego. Una turba de por lo menos mil manifestantes vandalizó y saqueó la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. y de otros locales comerciales. Durante los disturbios las autoridades intervinieron en la medida de sus posibilidades con tanquetas y rescataron en dos ocasiones al personal que estaba atrapado en la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. Sin embargo, las protestas fueron de tal magnitud que el Ejército, última instancia en estas situaciones, tuvo que intervenir para restaurar el orden público en la ciudad.

La Policía Nacional sabía de las manifestaciones y estuvo presente en las zonas de la ciudad que iban a ser afectadas por el paro. Inicialmente, para garantizar el derecho de reunión o movilización y el mantenimiento del orden público. Cuando advirtió que algunos manifestantes portaban armas o elementos para causar daño a los bienes públicos y a la propiedad privada, intentó dispersar la movilización con tanquetas.

Las autoridades anticiparon aquellas situaciones que normalmente ocurren en las manifestaciones, no era posible prever que una manifestación -que debía ser pacífica y cuyo fin era reclamar por la deficiente prestación de los servicios

Oficio del 29/07/2024

públicos- terminaría con el saqueo y la quema de la sede de Arquiglass del Caribe Ltda., empresa que -además- no estaba relacionada con el motivo de la protesta. La magnitud de los actos vandálicos, la desproporción de la multitud de personas que participó en ellos, el uso de armas de fuego y otros elementos con alto poder de destrucción y la intención de dañar la propiedad privada del sector de forma indiscriminada, eran hechos imprevisibles para las autoridades, dentro del desarrollo normal y habitual de una manifestación.

La conducta de la turba de manifestantes tampoco podía ser resistida por las autoridades, pues la cantidad de personas que participaron en estos actos y las acciones violentas que emprendieron no eran propias de una manifestación pacífica, sino de una asonada que se salió de control. Los medios que tenía la Policía Nacional a su disposición impedían concentrar la totalidad de la acción defensiva en un solo establecimiento de comercio, circunstancia que limitaba la capacidad de acción para repeler este ataque. La Policía Nacional hizo presencia en la bodega en reiteradas ocasiones e intentó dispersar la multitud con tanquetas. Sin embargo, el ataque fue tan desproporcionado que, para controlar a los manifestantes, el Ejército Nacional tuvo que hacer presencia en la zona.

No debe perderse de vista que en estos eventos debe juzgarse la posibilidad de resistir las acciones violentas, de acuerdo con la capacidad operativa y los medios de los que dispone el Estado. **En materia de mantenimiento del orden público, esa capacidad debe ser valorada según la magnitud de las alteraciones que se presentan en determinado momento y los medios disponibles para su restablecimiento, para establecer si el Estado podía hacerle frente.**

Como el ataque a la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. no podía ser previsto por la Policía Nacional **y tampoco podía ser resistido, se configuró el hecho de un tercero**". (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En este orden de ideas, la solicitud carece de fundamento jurídico si se tiene en cuenta que el hecho dañoso es atribuible única y **exclusivamente a terceros**, en este caso al tercero generador de los bloqueos de vías, cuya demostración corresponde a la parte convocante.

Al encontrarse demostrado que los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021** se originó en el actuar de un tercero, en esta ocasión señala lo participantes de las protestas, descarta la acción como elemento de imputación frente al Ministerio del Interior; máxime si se tiene entonces que fueron personas totalmente ajenas al actuar del Estado y su administración las que causaron o propiciaron dichas conductas contravencionales.

4.3.4 Innominada o genérica

Solicito a su Señoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso- CGP, en concordancia con el artículo 306 del C de P.C, y 187 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA, se sirva reconocer las excepciones que se llegaren a encontrar probadas aunque no hubieren sido alegadas expresamente.

En razón de lo anterior, solicitamos se tengan en cuenta los anteriores planteamientos para declarar probadas las excepciones propuestas y/o en su defecto, se denieguen las pretensiones de la demanda.

Oficio del 29/07/2024

5. PRUEBAS

Solicito se tenga como pruebas las documentales ya aportadas por la parte demandante, dentro del escrito de demanda.

Respecto al dictamen pericial conforme al artículo 219 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por el artículo 54 de la Ley 2080 de 2021 el Ministerio del Interior solicita que el perito asista personalmente a su despacho para los efectos de la contradicción del dictamen.

6. ANEXOS

Poder conferido por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior para actuar dentro del presente proceso.

7. PETICIÓN

Solicito muy respetuosamente a su Señoría que no se acceda a las pretensiones de la demanda y de conformidad con lo anteriormente expuesto y en consecuencia se proceda a desvincular a la entidad que representó, en razón a la acreditación de excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva en favor del Ministerio del Interior.

De no considerar viable la solicitud anterior, adelantado el procedimiento correspondiente, respetuosamente se solicita:

- 1) Declarar probadas en favor del Ministerio del Interior todas las excepciones señaladas en el acápite 4 del presente escrito, como son:
 - 4.3.1 *Inexistencia de falla o falta de servicio a cargo del Ministerio del Interior*
 - 4.3.2 *Inexistencia de un daño antijurídico*
 - 4.3.3 *Hecho de un tercero*
 - 4.3.4 *Innombrada o genérica*

8. NOTIFICACIONES

El Ministerio del Interior puede ser notificado en los correos electrónicos notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co o samuel.alvarez@mininterior.gov.co en su defecto en la Calle 12B No. 8 - 42 Teléfono (601) 242 7400, Ext. 3010.

Su señoría, con el respeto acostumbrado,



SAMUEL ALVAREZ BALLESTEROS


C.C. 79.620.303 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 186.605 del C. S. J.
E-mail: samuel.alvarez@mininterior.gov.co
Celular: 318 394 00 91

Traslado Contestación de la Demanda / Santa Anita Nápoles S.A. / 25000233600020230027600

Samuel Alvarez Ballesteros <samuel.alvarez@mininterior.gov.co>

Lun 29/07/2024 16:52

Para: ayepesb10@gmail.com <ayepesb10@gmail.com>; mocampo1@nutriavicola.com <mocampo1@nutriavicola.com>;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co <notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co>; Notificaciones Judiciales
<notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co>; notificacionesjudiciales LastName
<notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co>; hsantamaria@mintransporte.gov.co <hsantamaria@mintransporte.gov.co>;
jurisantamaria@outlook.com <jurisantamaria@outlook.com>; Notificaciones Bogota
<Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co>; Notificaciones Bogota <Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co>;
decun.notificacion@policia.gov.co <decun.notificacion@policia.gov.co>; notificaciones@cauca.gov.co
<notificaciones@cauca.gov.co>; njudiciales@valledelcauca.gov.co <njudiciales@valledelcauca.gov.co>;
dir_juridico@buenaventura.gov.co <dir_juridico@buenaventura.gov.co>; notificacionjudicial@guacari-valle.gov.co
<notificacionjudicial@guacari-valle.gov.co>; notificacionesjudiciales@cali.gov.co <notificacionesjudiciales@cali.gov.co>;
notificacionjudicial@andalucia-valle.gov.co <notificacionjudicial@andalucia-valle.gov.co>;
notificacionjudicial@ansermanuevovalle.gov.co <notificacionjudicial@ansermanuevovalle.gov.co>; notificaciones@buga.gov.co
<notificaciones@buga.gov.co>; juridica@bugalagrande-valle.gov.co <juridica@bugalagrande-valle.gov.co>;
notificacionesjudiciales@cartago.gov.co <notificacionesjudiciales@cartago.gov.co>
Cco: Samuel Alvarez Ballesteros <samuel.alvarez@mininterior.gov.co>

 1 archivos adjuntos (365 KB)

20240729 Contestación Dda Santa Anita Napoles S.A..pdf;



Bogotá, D.C. 29 de julio de 2024

Señores:

Apoderado de los demandantes:

ayepesb10@gmail.com

Santa Anita Nápoles S.A.

legal@santaanitanapoles.com

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co

Ministerio del Transporte

notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co

Ministerio de Defensa

Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co

Ejército Nacional

notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co

Policía Nacionaldecun.notificacion@policia.gov.co**Gobernación del Cauca**notificaciones@cauca.gov.co**Gobernación del Valle del Cauca**njudiciales@valledelcauca.gov.co**Distrito Especial Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura**dir_juridico@buenaventura.gov.co**Municipio de Guacarí, Valle del Cauca**notificacionjudicial@guacari-valle.gov.co**Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali**notificacionesjudiciales@cali.gov.co**El Municipio de Andalucía**notificacionjudicial@andalucia-valle.gov.co**El Municipio de Ansermanuevo**notificacionjudicial@ansermanuevovalle.gov.co**Municipio de Buga, Valle del Cauca**notificaciones@buga.gov.co**Municipio de Bugalagrande**juridica@bugalagrande-valle.gov.co**Municipio de Cartago**notificacionesjudiciales@cartago.gov.co**Municipio de El Cerrito**notificacionjudicial@elcerrito-valle.gov.co**Municipio de Dagua**contactenos@dagua-valle.gov.co**Municipio de Calima - El Darién**ofijuridica@calimaeldarienvalle.gov.co**Municipio de Alcalá**despacho@alcala-valle.gov.co**Municipio de Ginebra**notificacionjudicial@ginebra-valle.gov.co**Municipio de Guacarí**notificacionjudicial@guacarivalle.gov.co**Municipio de Jamundí**

notificacionjudicial@jamundi.gov.co

Municipio de La Unión Valle

notificacionjudicial@launion-valle.gov.co

Municipio de la Victoria

contactenos@lavictoriavalle.gov.co

Municipio de Obando

notificacionjudicial@obando-valle.gov.co

Municipio de Palmira

notificaciones.judiciales@palmira.gov.co

Municipio de Restrepo

juridica@restrepopalle.gov.co

Municipio de Riofrío

notificacionjudicial@riofriovallegov.co

Municipio de Roldanillo

notificacionjudicial@roldanillovalle.gov.co

Municipio de San Pedro

alcaldia@sanpedro-valle.gov.co

Municipio de Sevilla

esjudiciales@sevillavalle.gov.co

Municipio de Tuluá

juridico@tulua.gov.co

El Municipio de Viges

notificacionjudicial@vigesvalle.gov.co

El Municipio de Yotoco

notificacionjudicial@yotocovalle.gov.co

El Municipio de Yumbo

contactenos@yumbo.gov.co

El Municipio de Zarzal

juridica@zarzal-valle.gov.co

Ministerio Público

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado:

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

Ministerio Público

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado:

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

Referencia:	Medio de control:	Reparación Directa
	Radicado:	25000233600020230027600
	Demandante:	Santa Anita Nápoles S.A.
	Demandado:	Ministerio del Interior y Otros
	Asunto:	Contestación de la demanda y su reforma

Respetados señores:

SAMUEL ALVAREZ BALLESTEROS, mayor de edad vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.620.303 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 186.605 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado del Ministerio del Interior, por medio del presente escrito comparezco ante usted con el fin de dar **TRASLADO DE LA CONTESTACION LA DEMANDA** citada en la referencia, en escrito anexo.:

Para efectos de lo anterior me permito informar:

- 1) Correo electrónico del apoderado: samuel.alvarez@mininterior.gov.co
- 2) Celular de contacto del apoderado: **318 3940091**
- 3) Buzón de notificaciones judiciales del Ministerio del Interior:
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

El anterior **TRASLADO**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 numeral 14 del Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por la Ley 2080 de 2021, se remite copia del presente correo y sus anexos a la contraparte y a los demás sujetos intervinientes en el proceso, a sus direcciones electrónicas.

Nota:

Para notificaciones judiciales y de conciliaciones enviar ÚNICAMENTE al Buzón oficial de notificaciones judiciales del Ministerio del Interior:

notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

Con el debido respeto,



Dirección Jurídica
Grupo Gestión de lo Contencioso
Samuel Alvarez Ballesteros
Profesional Especializado
samuel.alvarez@mininterior.gov.co
Celular 318 394 0091
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 3029
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Aviso de confidencialidad: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Interior de Colombia. Si ha recibido este correo por error, por favor informar servicioalcidudano@mininterior.gov.co y bórralo. Si usted es el destinatario, se solicita mantener reserva en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen.



Por favor, piensa en el medio ambiente antes de imprimir este contenido.

Bogotá D.C., 27 de junio de 2024

Doctora

CLARA CECILIA SUÁREZ VARGAS

Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Sección Tercera – Subsección B

Bogotá, D.C.

Referencia:	Medio de control:	Reparación Directa
	Radicado:	25000233600020230029600
	Demandantes:	Santa Anita Nápoles S. A.
	Demandados:	Ministerio del Interior y Otros
	Asunto:	Solicitud reconocimiento de personería

LUZ YOLIMA HERRERA MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.100.798, en mi condición de Directora Jurídica del Ministerio del Interior, de conformidad con la Resolución No. 0882 del 06 de junio de 2024 y Acta de Posesión de la misma fecha, en ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 10 del Decreto 2893 de 2011 modificado por el artículo 5 del Decreto No. 0714 del 05 de junio de 2024, manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado **SAMUEL ALVAREZ BALLESTEROS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.620.303 de Bogotá, con Tarjeta Profesional No. 186.605 del Consejo Superior de la Judicatura, para defender los intereses de la Nación en representación del Ministerio del Interior, dentro del proceso citado en la referencia.

El apoderado queda facultado para realizar las actuaciones conforme los artículos 75 y 77 del Código General del Proceso y, particularmente, las de tramitar, sustituir, renunciar, desistir, reasumir y conciliar o transigir de conformidad con la decisión adoptada por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio del Interior. Solicito a usted reconocerle personería.


LUZ YOLIMA HERRERA MARTINEZ
Directora Jurídica
Ministerio del Interior

Acepto:


SAMUEL ALVAREZ BALLESTEROS
C.C. 79.620.303 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 186.605 del C. S. J.
Celular: 318 3940091
E-mail: samuel.alvarez@mininterior.gov.co
Notificaciones: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA JURÍDICA	
Revisó	<u>Dr. Rubén</u>
Aprobó	<u>N</u>

MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETO NÚMERO 0714 DE 2024

5 JUN 2024

Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 16° del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los Decretos 1835 de 2012, 2340 de 2015, 1140 de 2018, 2353 de 2019 y 1152 de 2022, se establecen los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integró el Sector del Interior.

Que mediante la Ley 2281 de 2023, se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad y se adoptaron los elementos de su estructura orgánica, estableciendo en su artículo 3 el objeto de:

"(...) diseñar, formular, adoptar, dirigir, coordinar, articular, ejecutar fortalecer y evaluar. las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; la defensa de los sujetos de especial protección constitucional, de población vulnerable y de grupos históricamente discriminados o marginados, incorporando y adoptando los enfoques de derechos, de género, diferencial, étnico - racial e interseccional".

Que el artículo 5 de la Ley 2281 de 2023, dispuso que, para desarrollar su objeto, el Ministerio de Igualdad y Equidad, en todo el país, con énfasis en los territorios excluidos y marginados, protegerá los derechos, con enfoque de género, transversal, focalizado y de empoderamiento de las mujeres y las niñas, diferencial e interseccional, de los sujetos de especial protección constitucional, entre otros: Población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palanqueros, indígenas y Rrom, Campesinos y campesinas y Personas con discapacidad.

Que mediante el Decreto Ley 1075 de 2023 *"Por el cual se adopta la estructura del Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones"*, se definió en los numerales 5 y 6 del artículo 5 la estructura del Despacho del Viceministerio de las Diversidades y Despacho del Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos, respectivamente, con las siguientes direcciones a su cargo:

- 5.1. Dirección para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+
- 5.2. Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad
- 6.1. Dirección para la Igualdad y la Equidad de Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras
- 6.2. Dirección para la Igualdad y la Equidad de Pueblos Indígenas

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

6.3. Dirección para la Igualdad y la Equidad del Pueblo Rrom

6.4. Dirección para la igualdad y la Equidad del Campesinado

Que, por otro lado, el Despacho del Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, tiene a su cargo las siguientes direcciones:

2.1. Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.

2.2. Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

2.3. Dirección de Derechos Humanos.

Que, por su parte, el Despacho del Viceministerio General del Interior del Ministerio del Interior, tiene dentro de las direcciones a su cargo, entre otras, la de Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal.

Que, en razón a lo anterior se identifican unas competencias que se cruzan entre las carteras ministeriales; por lo cual, es necesario precisar el ámbito de éstas, identificar sus alcances y armonizar la ejecución misional y presupuestal de los planes, programas y proyectos, que se deriven de éstas.

Que, teniendo en cuenta lo expuesto será el Ministerio de Igualdad y Equidad, el que formula y fija la política pública para las comunidades étnicas, población LGTBIQ+ y de población vulnerable, como mujeres, juventudes, habitantes de calle, y aquellas de especial protección constitucional; y será el Ministerio del Interior, quien continuará ejecutando la asistencia técnica en territorio, llevará el registro de los pueblos y comunidades étnicas y velará por las instancias de participación y diálogo social de estas comunidades con el Gobierno Nacional, articulando y coordinando, también lo pertinente, con las entidades territoriales.

Que de esa forma, la denominación del Viceministerio que lidera el diálogo social, igualdad y derechos humanos, deberá ser ajustada en razón a las funciones asignadas y a propósito de la denominación que encabeza al Ministerio de Igualdad y Equidad, en aras de evitar la confusión y duplicidad en las denominaciones.

Que además, en los artículos 12 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, mediante la cual se expide el Código General Disciplinario, se indicó que el disciplinable deberá ser investigado y juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo, estableciendo dos fases dentro del proceso disciplinario, una de instrucción y otra de juzgamiento, lo cual implica el deber de las entidades y los organismos del Estado de organizar una oficina o unidad del más alto nivel para conocer los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de sus servidores y exservidores.

Que conforme a lo expuesto, se hace necesario modificar la estructura del Ministerio del Interior, ajustar determinadas funciones, precisar algunas competencias y denominaciones de ciertos despachos del Ministerio del Interior, con el fin de organizar las dependencias, crear y asignar funciones a la Oficina de Control Disciplinario Interno para que conozca de la etapa de instrucción, y modificar las funciones de la Oficina Asesora Jurídica para que asuma la primera instancia de juzgamiento, del Despacho del Ministro para que adelante la segunda instancia de juzgamiento, de la Secretaria General y de la Subdirección de Gestión Humana en lo relacionado con el fortalecimiento de la cultura organizacional orientada a la prevención, la lucha contra la corrupción, la apropiación del régimen disciplinario y la promoción del servicio público transparente, íntegro, idóneo y eficaz de la entidad; y la armonización de funciones, en relación con aquellas de competencia del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Que de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en desarrollo de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, prevista en el artículo

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 2015, se estableció la necesidad de adelantar un rediseño institucional para el Ministerio del Interior, bajo los preceptos de eficiencia, productividad y generación de valor público.

Que el Ministerio del Interior presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, el estudio técnico de fortalecimiento institucional de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y los artículos 2.2.12.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015; Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, el cual, emitió concepto técnico favorable.

Que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió concepto favorable respecto a la viabilidad presupuestal para la modificación de la planta de personal del Ministerio del Interior.

Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, emitió previo concepto favorable para la modificación de la estructura y planta de personal del Ministerio del Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 0199 de 2024.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1. Modificar el artículo 1 del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 1 del Decreto 1140 de 2018, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 1. Objetivo. El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, gestión pública territorial, seguridad y convivencia ciudadana, democracia, participación ciudadana, acción comunal, libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa, concertación, diálogo político, coordinación interinstitucional, participación, representación política y registro de los pueblos y comunidades étnicas, derecho de autor y derechos conexos, prevención y protección a personas por violaciones a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, gestión integral contra incendios, las cuales se desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.

Igualmente, el Ministerio del Interior coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, para el desarrollo de la Agenda Legislativa del Gobierno nacional".

Artículo 2. Modificar el artículo 2 del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 2 del Decreto 1140 de 2018, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 2. Funciones. El Ministerio del Interior, además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, cumplirá las siguientes:

1. Articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de las políticas públicas del Sector Administrativo del Interior.

2. Diseñar e implementar de conformidad con la ley las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, en coordinación con las demás entidades del Estado competentes, así como la prevención a las violaciones de estos y la observancia al Derecho Internacional Humanitario, con un enfoque integral, diferencial, social y de género.

3. Servir de enlace y coordinador de las entidades del orden nacional en su relación con los entes territoriales y promover la Integración de la Nación con el territorio y el desarrollo territorial, a través de la profundización de la descentralización, ordenamiento y autonomía territorial y la coordinación y armonización de las agendas de los diversos sectores administrativos, dentro de sus competencias, en procura de este objetivo.

4. Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

Pública y demás entidades competentes, la política pública para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de Gobierno en las administraciones locales ubicadas en zonas fronterizas.

5. Dirigir y promover las políticas tendientes a la prevención de factores que atenten contra el orden público interno, así como tomar las medidas para su preservación, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, las autoridades departamentales y locales en lo que a estos corresponda.

6. Atender los asuntos políticos y el ejercicio de los derechos en esta materia, así como promover la convivencia y la participación ciudadana en la vida y organización social y política de la Nación.

7. Promover y apoyar la generación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en las entidades territoriales.

8. Administrar el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Fonsecon- teniendo en cuenta la participación del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, según los proyectos que se presenten y de conformidad con la política que en materia de seguridad y convivencia defina el Gobierno nacional.

9. Administrar el Fondo para la Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Democracia, el Fondo de Protección de Justicia y el Fondo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas.

10. Formular, promover y hacer seguimiento al derecho fundamental de consulta previa, concertación, diálogo político, coordinación interinstitucional, participación, representación política y registro de los pueblos y comunidades étnicas, con un enfoque integral, diferencial, social y de género, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.

11. Formular y promover la política pública de libertad religiosa, de cultos y conciencia, y el derecho individual a profesar una religión o credo para su efectiva materialización, protección, promoción, difusión y su aporte al bien común, con un enfoque integral, pluralista y social, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado, en los términos de la Ley 133 de 1994, 1753 de 2015.

12. Formular y promover las políticas públicas relacionadas con la protección, promoción y difusión del derecho de autor y los derechos conexos. Así mismo, recomendar la adhesión y procurar la ratificación y aplicación de las convenciones internacionales suscritas por el Estado colombiano en la materia.

13. Formular, promover y hacer seguimiento a las políticas públicas relacionadas con los objetivos y funciones de las entidades públicas adscritas y vinculadas al Ministerio del Interior.

14. Coordinar, con el concurso de los demás ministerios, la agenda legislativa del Gobierno nacional en el Congreso de la República y las demás entidades del orden nacional.

15. Servir de órgano de enlace, comunicación y coordinación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa.

16. Coordinar con las demás autoridades competentes el diseño e implementación de herramientas y mecanismos eficientes en materia electoral que busquen garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales.

17. Incentivar alianzas estratégicas con otros gobiernos u organismos de carácter internacional, que faciliten e impulsen el logro de los objetivos del Sector Administrativo del Interior, en coordinación con las entidades estatales competentes.

18. Las demás funciones asignadas por la Constitución y la ley.

Artículo 3. Modificar el artículo 5 del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los artículos 4 del Decreto 1140 de 2018, 1 del Decreto 2353 de 2019 y 5 del Decreto 1152 de 2022, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 5. Estructura. La Estructura del Ministerio del Interior, será la siguiente:

1. Despacho del Ministro del Interior.

1.1. Oficina Asesora de Planeación.

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

- 1.2. Oficina de Control Interno.
- 1.3. Oficina de Control Disciplinario Interno
- 1.4. Oficina de Información Pública del Interior.
- 1.5. Dirección Jurídica.

2. Despacho del Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos.

- 2.1. Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
- 2.2. Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
- 2.3. Dirección de Derechos Humanos
- 2.4. Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
 - 2.4.1. Subdirección Técnica de Consulta Previa
 - 2.4.2. Subdirección de Gestión de Consulta Previa
 - 2.4.3. Subdirección Corporativa
- 2.5. Dirección de Asuntos Religiosos

3. Despacho del Viceministro General del Interior

- 3.1. Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.
 - 3.1.1. Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata.
 - 3.1.2. Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
- 3.2. Dirección de Asuntos Legislativos
- 3.3. Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.

4. Secretaría General.

- 4.1 Subdirección de Gestión Contractual.
- 4.2 Subdirección de Gestión Humana.
- 4.3 Subdirección Administrativa y Financiera.

5. Órganos de Asesoría y Coordinación.

- 5.1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- 5.2. Comisión de Personal.
- 5.3. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

Artículo 4. Modificar el artículo 6 del Decreto Ley 2893 de 2011, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 6. Funciones del Despacho del Ministro del Interior. Son funciones del Ministro del Interior, además de las señaladas por la Constitución Política y el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Formular las políticas en los temas de competencia del Ministerio del Interior, bajo la dirección del Presidente de la República.
2. Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, así como con los organismos de control y la Organización Electoral, para el desarrollo y consolidación de la política pública de competencia del Ministerio.
3. Coordinar la formulación y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Administrativo del Interior.
4. Ejercer la representación legal del Ministerio del Interior.
5. Coordinar, orientar y hacer seguimiento a la planeación estratégica del Ministerio del Interior y del Sector Administrativo del Interior.
6. Coordinar la actividad del Ministerio en lo relacionado con sus objetivos y funciones, con las entidades públicas del orden nacional del sector central y del descentralizado, los entes territoriales y sus entidades, el Congreso de la República, la Organización Electoral y los organismos de control.
7. Apoyar y coordinar con el Ministerio de Defensa Nacional las instrucciones a impartir a la Policía Nacional para la conservación y el restablecimiento del orden público interno en aquellos asuntos cuya dirección no corresponda totalmente al Ministro de Defensa Nacional.
8. Impulsar los proyectos de ley y actos legislativos ante el Congreso de la República que sean de origen gubernamental y coordinar la acción del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, con el concurso de los demás Ministerios y las demás entidades públicas del orden nacional.
9. Preparar los proyectos de decreto y resoluciones ejecutivas que deban expedirse en ejercicio de las atribuciones correspondientes al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, en los asuntos de su competencia.

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

10. Evaluar en forma permanente y adelantar el seguimiento de la ejecución de los compromisos internacionales en las materias de su competencia, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
11. Aprobar los anteproyectos de presupuesto de inversión, de funcionamiento y el proyecto de utilización de recursos del crédito público que se apropien para el Ministerio del Interior.
12. Suscribir en nombre de la Nación y de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Presupuesto, los contratos relativos a asuntos propios del Ministerio.
13. Ejercer la representación legal de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Fonsecon- del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia, del Fondo de Protección de Justicia y del Fondo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y ordenar el gasto de los mismos, funciones que podrán ser delegadas.
14. Preparar los anteproyectos de planes o programas o proyectos de inversiones correspondientes al Sector Administrativo del Interior.
15. Vigilar la ejecución del presupuesto correspondiente al Ministerio.
16. Representar en los asuntos de su competencia al Gobierno Nacional en la ejecución de tratados y convenios internacionales, de acuerdo con las normas legales sobre la materia.
17. Dirigir la administración de personal conforme a las normas sobre la materia.
18. Ejercer la segunda instancia de la etapa de juzgamiento de los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores y exservidores del Ministerio del Interior, de conformidad con lo dispuesto en el Código General Disciplinario o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.
19. Crear, conformar y asignar funciones a los órganos de asesoría y coordinación, así como los grupos internos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones del Ministerio, mediante acto administrativo dentro del marco de su competencia.
20. Implementar, mantener y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
21. Distribuir entre las diferentes dependencias del Ministerio las funciones y competencias que la ley le otorgue a la Entidad, cuando las mismas no estén asignadas expresamente a alguna ellas.
22. Ejercer las funciones que el Presidente de la República le delegue o la ley le confiera y vigilar el cumplimiento de las que por mandato legal se hayan otorgado a dependencias del Ministerio, así como las que se hayan delegado en funcionarios del mismo.

Artículo 5. Modificar el artículo 10 del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 5 del Decreto 1140 de 2018, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 10. Funciones de la Dirección Jurídica. Son funciones de la Dirección Jurídica, las siguientes:

1. Formular directrices que promuevan la unidad jurídica y conceptual, así como para los asuntos jurídicos correspondientes del Sector Administrativo del Interior y dirimir las diferencias de interpretación legal y de competencias que se presenten entre las dependencias de la entidad.
2. Impartir lineamientos desde el Despacho del (la) Ministro (a) a las demás instancias directivas de la entidad en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con sus funciones, competencias y gestión.
3. Articular con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, la posición jurídica oficial del Gobierno nacional en los temas que son de competencia del Ministerio del Interior.
4. Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, mediante poder o delegación, supervisar el trámite de los mismos y ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.
5. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de jurisdicción coactiva del Ministerio.
6. Conocer, direccionar y articular con las diferentes dependencias, las acciones de tutela en las que deba intervenir el Ministerio, y realizar su seguimiento hasta el archivo del trámite.
7. Articular y coordinar con las diferentes dependencias del Ministerio el cumplimiento cabal y oportuno de las órdenes judiciales y efectuar su seguimiento.
8. Proyectar, analizar, revisar y/o aprobar para la firma del (la) Ministro (a), los actos administrativos y consultas que éste le indique y que deba suscribir conforme a la Constitución Política y la ley.
9. Elaborar, revisar y/o aprobar los proyectos de decreto de designación de los gobernadores y alcaldes distritales encargados, así como de designación de gobernadores, alcaldes distritales y municipales ad hoc, cuando la autoridad competente decide los impedimentos o recusaciones.
10. Analizar, proponer y/o participar en la elaboración de los proyectos normativos que se presenten a consideración del Ministerio, conceptuando sobre su viabilidad jurídica, así como sobre la constitucionalidad y coherencia con el ordenamiento jurídico vigente de las iniciativas legislativas en asuntos del Ministerio del Interior.
11. Revisar y aprobar las consultas que se soliciten formular a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo Estado.

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

12. Tramitar los recursos, revocatorias directas y en general, las actuaciones jurídicas relacionadas con las funciones del Ministerio que no correspondan a otras dependencias de la entidad.
13. Conceptuar sobre proyectos de actos administrativos, contratos y/o convenios que deba suscribir o proponer la entidad, y sobre los demás asuntos que le asignen, en relación con la naturaleza del Ministerio, en lo de su competencia, sin perjuicio de las funciones propias de la Subdirección de Gestión Contractual.
14. Liderar la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores y exservidores del Ministerio del Interior, de conformidad con lo dispuesto en el Código General Disciplinario o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.
15. Gestionar el desarrollo coordinado de las políticas públicas en los temas que se relacionen con las funciones a cargo del Ministerio, en el marco de sus competencias.
16. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
17. Establecer estrategias de prevención del daño antijurídico y participar en la definición e identificación de los riesgos jurídicos del Ministerio, de conformidad con los lineamientos técnicos y normativos aplicables.
18. Coordinar con la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal en el estudio de inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos electorales
19. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Artículo 6. Modificar el artículo 11 del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 2 del Decreto 1152 de 2022, el cual quedará así:

ARTÍCULO 11. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS. Son funciones del Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, además de las establecidas en el artículo 62 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Apoyar y asistir al Ministro en el diseño, análisis, impulso y seguimiento a proyectos de actos legislativos y de ley ante el Congreso de la República, principalmente en las materias de su competencia.
2. Liderar la formulación, adopción, ejecución y seguimiento de las políticas públicas del Ministerio, en particular las relativas a los derechos humanos y libertades, de consulta previa, concertación, diálogo político, coordinación interinstitucional, participación, representación política y registro de los pueblos y comunidades étnicas, de prevención, autoprotección, fortalecimiento organizativo y participación de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos; libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia y el derecho Individual a profesar una religión o credo; y la coordinación del control a la gestión misional de la entidad.
3. Fortalecer los procesos de diálogo social y concertación con las comunidades de su competencia.
4. Evaluar en forma permanente y adelantar el seguimiento de la ejecución de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
5. Apoyar la elaboración de la planeación estratégica del Sector Administrativo en los temas de su competencia.
6. Asistir al Ministro en la función de enlace, comunicación y coordinación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, en los temas de su competencia, sin perjuicio de las funciones del Viceministro General del Interior.
7. Coordinar y hacer seguimiento de las actividades de las direcciones del Ministerio adscritas a su despacho, para garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones y de los planes, programas y proyectos del Ministerio.
8. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
9. Orientar la consecución de recursos complementarios para atender los programas de su competencia y de las áreas misionales a cargo.
10. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
11. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Artículo 7. Modificar el artículo 12 del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 7 del Decreto 1152 de 2022, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCIÓN COMUNAL. La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, dependerá del Despacho del Viceministro General del Interior y sus funciones son las siguientes:

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

1. Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia participativa, la organización y participación de la sociedad civil y la garantía de los derechos y deberes electorales.
2. Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas en materia de organismos de acción comunal, tendientes al fortalecimiento de la organización y de sus espacios de participación, así como ejercer la función de inspección, control y vigilancia de los organismos de acción comunal de tercero y cuarto grado, y de aquellos cuyo control y vigilancia no han sido descentralizados, en los términos consagrados en la legislación que rige la actividad comunal y demás normas que la modifiquen.
3. Promocionar y auspiciar, en coordinación con los entes territoriales, la participación ciudadana y el seguimiento de la gestión administrativa pública, mediante programas de difusión y capacitación de las comunidades.
4. Evaluar el comportamiento político y participativo de los ciudadanos en el marco de los procesos electorales, a nivel nacional y territorial.
5. Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de apoyo institucional para el fortalecimiento de la democracia local y territorial, que permita realizar un control social efectivo.
6. Aprobar, suspender y cancelar la personería jurídica de las federaciones de acción comunal y de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
7. Propugnar por la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y el cumplimiento de las garantías para el normal desarrollo de los procesos electorales, y propender por la modernización de las instituciones y procedimientos electorales.
8. Generar alianzas con entidades del orden nacional y territorial para coordinar y articular programas en materia de participación política y social para el fortalecimiento de la democracia.
9. Proponer proyectos de ley o de actos legislativos en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en materia de su competencia.
10. Resolver conceptos en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos electorales, en coordinación con la Dirección Jurídica.
11. Apoyar la gestión estratégica y operativa del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia.
12. Promover, establecer y fortalecer instancias de participación para la población campesina, que favorezcan la materialización del derecho a la participación reforzada.
13. Acompañar el proceso de promoción y fortalecimiento de las organizaciones campesinas mediante estrategias de coordinación interinstitucional, asistencia técnica y capacitación.
14. Realizar acciones de capacitación y asesoría dirigidas a las organizaciones de personas con discapacidad para el conocimiento de sus derechos, deberes y normatividad relacionada con discapacidad.
15. Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad que las representan a nivel internacional, nacional, regional y local para promover su participación plena y efectiva en la adopción de todas las decisiones que los benefician y/o los afectan, en concordancia con lo establecido en la Ley Estatutaria 1618 de 2013.
16. Orientar a las entidades territoriales en la definición, adopción e implementación de planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad.
17. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
18. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
19. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Artículo 8. Modificar el artículo 13 del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 1 del Decreto 2340 de 2015 y artículo 2 del Decreto 2353 de 2019, el cual quedará así:

ARTÍCULO 13. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS. Son funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, las siguientes:

1. Asesorar, y articular la concertación, diálogo político, coordinación interinstitucional, participación, representación política y registro de los pueblos indígenas y Rom en el marco de su competencia.
2. Coordinar interinstitucionalmente el diálogo político con los pueblos indígenas y Rom previsto por la ley, y promover la participación de las organizaciones y autoridades que los representen.
3. Propender por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales, en coordinación con las entidades y organismos competentes.
4. Prestar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, el apoyo humano, técnico y financiero para la identificación, procedencia y realización de los procesos de consulta previa que esta determine.

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

5. Coordinar y realizar los procesos de consulta previa, para la adopción de iniciativas legislativas y administrativas del nivel nacional, bajo los lineamientos de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
6. Llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos indígenas y su actualización.
7. Llevar el registro de los censos de población, autoridades tradicionales reconocidas por la respectiva comunidad y asociaciones del pueblo Rom.
8. Diseñar y ejecutar programas y proyectos de fortalecimiento de los procesos organizacionales de las comunidades indígenas y Rom.
9. Promover la resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres de las comunidades indígenas y Rom.
10. Promover acciones con enfoque diferencial, orientadas a atender la concertación, diálogo político, coordinación interinstitucional, participación, representación política y registro de la población indígena y Rom, y la formulación de acciones conjuntas.
11. Prestar asesoría a las gobernaciones y alcaldías municipales para la debida atención en materia de concertación, diálogo político, coordinación interinstitucional, participación, representación política y registro de las comunidades indígenas, al pueblo Rom.
12. Promover en coordinación con el Sistema Nacional Ambiental la formulación de agendas ambientales conjuntas con las comunidades indígenas y Rom.
13. Proponer proyectos de ley o de actos legislativos, así como efectuar el análisis normativo y jurisprudencial en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en las materias de su competencia.
14. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
15. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
16. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia

Artículo 9. Modificar el artículo 14 del Decreto ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 3 del Decreto 2353 de 2019, el cual quedará así:

ARTÍCULO 14. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. Son funciones de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, las siguientes:

1. Coordinar interinstitucionalmente con las instituciones gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento de las acciones orientadas al diálogo político, reconocimiento, protección de los derechos étnicos y desarrollo de la diversidad cultural para las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, además de promover la participación de las organizaciones y autoridades que los representan.
2. Diseñar programas de asistencia técnica para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, en fortalecimiento y formación en derechos étnicos, apoyo al fortalecimiento de capacidades administrativas de las autoridades y organizaciones de estas comunidades, entre otros.
3. Diseñar y ejecutar programas y proyectos de fortalecimiento de los procesos organizacionales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
4. Prestar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, el apoyo humano y técnico para la identificación, procedencia y realización de los procesos de consulta previa que esta determine.
5. Coordinar y realizar los procesos de consulta previa, para la adopción de iniciativas legislativas y administrativas del nivel nacional, bajo los lineamientos de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
6. Llevar el registro único nacional de los consejos comunitarios. Así como los de organizaciones de base, y representantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
7. Diseñar y actualizar el sistema de información de consejos comunitarios, organizaciones de base y formas o expresiones organizativas de los pueblos y las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Esta función se podrá ejecutar con apoyo de otras instituciones públicas.
8. Promover y realizar programas de investigación etnológica de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, a fin de que contribuyan a la garantía de derechos e identificación de estas comunidades.
9. Propender por la conservación de las costumbres, la protección de conocimientos tradicionales, así como el fortalecimiento, actualización y formulación de los instrumentos de gobierno propio de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, en coordinación con las entidades y organismos competentes.

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

10. Promover con los diferentes niveles de Gobierno, la incorporación y articulación de los derechos y libertades de concertación, diálogo político, coordinación interinstitucional, participación, representación política y registro de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en políticas, planes, programas y proyectos especiales sectoriales.
11. Prestar asesoría técnica a las gobernaciones y alcaldías para la debida atención a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, principalmente para la concertación, diálogo político, coordinación interinstitucional, participación, representación política y registro de comunidades.
12. Promover la resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
13. Participar en las sesiones del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 70 de 1993.
14. Apoyar la ejecución de los planes, programas y proyectos para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera víctima del conflicto armado.
15. Realizar acciones para el cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional y demás instancias judiciales, relacionados con la vulneración de los derechos humanos y desplazamiento forzado de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.
16. Implementar programas y proyectos, para mitigar el racismo y discriminación racial en contra de la población y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.
17. Promover en coordinación con el Sistema Nacional Ambiental la implementación del enfoque diferencial, para el fortalecimiento de los instrumentos especiales de gobierno propio, uso y manejo de los recursos naturales de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales.
18. Articular con Dirección de asuntos legislativos análisis normativo y jurisprudencial, así como proponer la presentación proyectos de ley o de actos legislativos para la garantía de derechos de los pueblos y las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales.
19. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
20. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
21. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia".

Artículo 10. Modificar el artículo 15 del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 2 del Decreto 2340 de 2015, el cual quedará así:

ARTÍCULO 15. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Son funciones de la Dirección de Derechos Humanos, las siguientes:

1. Liderar en el marco de su competencia, la formulación, seguimiento y evaluación de los componentes de la política nacional integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en las materias de competencia del ministerio.
2. Contribuir en la implementación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el nivel nacional y territorial.
3. Establecer los lineamientos generales para el diseño e implementación de mecanismos de prevención y protección dirigidos a las personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo contra su vida, integridad, libertad y seguridad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno.
4. Asesorar técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de políticas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en la incorporación de un enfoque de derechos en los diferentes instrumentos de planeación y sus estrategias de implementación en el ámbito municipal y departamental.
5. Desarrollar, en coordinación con las entidades competentes acciones tendientes a la consolidación de una cultura de Derechos Humanos.
6. Proponer, discutir y hacer seguimiento a los proyectos de ley o de acto legislativo, así como efectuar el análisis normativo y jurisprudencial en las materias de su competencia.
7. Adelantar los estudios y las investigaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que contribuyan al diagnóstico y la elaboración de propuestas tendientes a garantizar la vigencia de los mismos.
8. Diseñar programas de asistencia técnica y de apoyo en materia de autoprotección, fortalecimiento organizativo y participación para personas defensoras de derechos humanos, líderes/as sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales para población lesbiana, gais, bisexual, transexual, e intersexual (LGBTI).
9. Promover acciones con enfoque diferencial, tanto de parte del Ministerio como de las demás entidades del Estado, orientadas a la autoprotección, el fortalecimiento organizativo y la participación

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

- de las personas defensoras de derechos humanos, líderes/as sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales de la población LGBTIQ+, y la formulación de acciones conjuntas.
10. Prestar asesoría a las gobernaciones y alcaldías municipales para la debida atención en materia de autoprotección, fortalecimiento organizativo y participación de personas defensoras de derechos humanos, líderes/as sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales de la población LGBTI.
 11. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
 12. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
 13. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Artículo 11. Modificar el artículo 21 del Decreto Ley 2893 de 2011, el cual quedará así:

"Artículo 21. Funciones de la Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General, las siguientes:

1. Asistir al Ministro en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración del Ministerio.
2. Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos financieros y contables, contratación pública, soporte técnico informático, servicios administrativos y gestión documental.
3. Trazar las políticas y programas de administración de personal, bienestar social, selección, registro y control, capacitación, incentivos y desarrollo del talento humano y dirigir su gestión.
4. Presidir el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio del Interior.
5. Gestionar la consecución de recursos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos institucionales.
6. Velar por el funcionamiento de la prestación del servicio al ciudadano y por la atención de quejas y reclamos que presenten los ciudadanos sobre el desempeño de las dependencias o personas que laboran en el Ministerio.
7. Presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Programa Anual de Caja, de conformidad con las obligaciones financieras adquiridas.
8. Dirigir la elaboración y ejecución del Plan de Compras del Ministerio.
9. Dirigir y orientar el mantenimiento y mejoramiento de los bienes del Ministerio del Interior.
10. Hacer seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables, de los recursos asignados al Ministerio directamente o a sus fondos.
11. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento normal del Ministerio y sus fondos, velando especialmente por que se cumplan las normas vigentes sobre estas materias.
12. Diseñar los procesos de organización, estandarización de métodos, elaboración de manuales de funciones y todas aquellas actividades relacionadas con la racionalización de procesos administrativos del Ministerio, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.
13. Apoyar la orientación, coordinación y el ejercicio del control administrativo de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio, conforme a la normatividad sobre la materia y a las instrucciones que le imparta el Ministro.
14. Apoyar la gestión operativa del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia en cumplimiento de las disposiciones legales, directamente y a través de las áreas a cargo.
15. Liderar, en coordinación con la Subdirección de Gestión Humana, las medidas, los programas y las estrategias de divulgación encaminados a fortalecer una cultura organizacional orientada a la prevención, la lucha contra la corrupción, la apropiación del régimen disciplinario y la promoción de un servicio público transparente, íntegro, idóneo y eficaz de la entidad, de conformidad con los Códigos de Integridad y el General Disciplinario.
16. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
17. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
18. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Artículo 12. Modificar el artículo 24 del Decreto Ley 2893 de 2011, el cual quedará así:

"Artículo 24. Funciones de la Subdirección de Gestión Humana. Son funciones de la Subdirección de Gestión Humana, las siguientes:

1. Dirigir el proceso gerencial "Gestión del Talento Humano", con sus tres componentes de planeación, gestión y desarrollo.

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

2. Apoyar a la Secretaría General en los elementos conceptuales y técnicos necesarios para la formulación de las políticas, planes, programas y estrategias de gestión y proyección del talento humano del Ministerio.
3. Formular, ejecutar y evaluar los planes estratégicos y programas para la gestión del talento humano en sus fases de ingreso, permanencia y retiro de los funcionarios del Ministerio, de conformidad con las normas legales vigentes.
4. Diseñar, dirigir, administrar y evaluar los programas de formación, capacitación, incentivos, bienestar, salud ocupacional y desarrollo de los servidores públicos del Ministerio, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación.
5. Coordinar y apoyar, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, el procedimiento relacionado con los Acuerdos de Gestión que suscriban los gerentes públicos del Ministerio, de acuerdo con lo previsto en la ley y los procedimientos internos.
6. Custodiar, sistematizar y mantener actualizadas las historias laborales de todos los funcionarios del Ministerio.
7. Diseñar e implantar el plan anual de vacantes del Ministerio con destino al Departamento Administrativo de la Función Pública.
8. Diseñar y ejecutar, en coordinación con la Oficina de Control Disciplinario Interno, las medidas, los programas y las estrategias de divulgación encaminados a fortalecer una cultura organizacional orientada a la prevención, la lucha contra la corrupción, la apropiación del régimen disciplinario y la promoción de un servicio público transparente, íntegro, idóneo y eficaz de la entidad, de conformidad con Códigos de Integridad y el General Disciplinario.
9. Asesorar al Ministro en el ejercicio del control administrativo y de las atribuciones de suprema dirección del sector en relación con el talento humano.
10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
11. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
12. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Artículo 13. Creación Oficina de Control Disciplinario Interno. Adicionar el artículo 10A al Decreto Ley 2893 del 2011, el cual quedará así:

"Artículo 10A. Funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Son funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno, las siguientes:

1. Organizar, dirigir y coordinar la aplicación del régimen disciplinario, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
2. Preparar y establecer procedimientos operativos disciplinarios para que los procesos se desarrollen dentro de los principios legales de economía, celeridad, igualdad, eficiencia, imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el derecho de defensa, el debido proceso y los principios de la función pública.
3. Conocer y adelantar las actuaciones disciplinarias hasta el agotamiento de la etapa de instrucción, frente a los servidores y exservidores del Ministerio del Interior, de conformidad con el Código General Disciplinario y las normas que lo modifiquen o sustituyan.
4. Notificar y comunicar las decisiones que se adopten en la etapa de instrucción, especialmente informar que, notificado el pliego de cargos, el proceso continuará en otra dependencia, con base en las funciones y competencias de la entidad y el régimen disciplinario vigente.
5. Trasladar a la Dirección Jurídica, los procesos disciplinarios en los que se dicte pliego de cargos, debidamente notificados, para que esta adelante la etapa de juzgamiento en primera instancia, de acuerdo con la normativa vigente.
6. Informar a la Procuraduría General de la Nación, la apertura de las investigaciones disciplinarias, para lo de su competencia, teniendo en cuenta las normas que rigen la materia.
7. Preparar y remitir los informes a la Procuraduría General de la Nación en relación con los procesos disciplinarios y demás actuaciones inherentes a las funciones encomendadas, de conformidad con la normativa aplicable.
8. Dar a conocer a la Fiscalía General de la Nación, a los organismos de control y fiscalización del Estado y a las dependencias de control disciplinario interno de otras entidades, los hechos y las pruebas materia de la acción disciplinaria a su cargo, cuando pudieren ser de competencia de aquellos.
9. Proponer a la Secretaría General - Subdirección de Gestión Humana, las medidas de prevención, los programas y las estrategias de divulgación encaminadas a fortalecer una cultura organizacional orientada a la prevención, la lucha contra la corrupción, la apropiación del régimen disciplinario y la promoción del servicio público transparente, íntegro, idóneo y eficaz de la entidad, de conformidad con el Código de Integridad y lo establecido en el Código General Disciplinario y las normas que lo modifiquen o sustituyan.

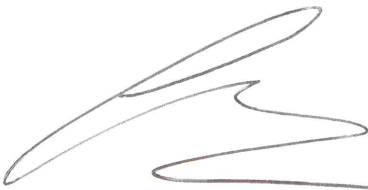
Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior"

- 10. Mantener, custodiar y actualizar los archivos y registros de los procesos disciplinarios, en concordancia con la gestión de la información de la entidad.
- 11. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
- 12. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
- 13. Las demás funciones que le sean asignadas por la Ley y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Artículo 14. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente el Decreto Ley 2893 de 2011 modificado por los Decretos 1835 de 2012, 2340 de 2015, 1140 de 2018, 2353 de 2019 y 1152 de 2022 y demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C. a los,

5 JUN 2024



EL MINISTRO DEL INTERIOR,



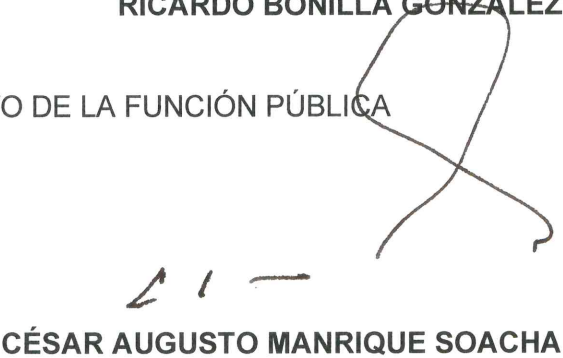
LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



RICARDO BONILLA GONZÁLEZ

EL DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



CÉSAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA

0882 06 JUN 2024
RESOLUCIÓN NÚMERO _____ DE _____

Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en la planta de personal

EL MINISTRO DEL INTERIOR

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015, 1º del Decreto 0658 de 2024, en concordancia con lo señalado en los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 6º del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el artículo 4 del Decreto 714 de 2024 y

CONSIDERANDO:

Que Luz Yolima Herrera Martínez, se venía desempeñando el empleo de Jefe Oficina Asesora, código 1045, grado 16 de la planta global del Ministerio del Interior, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica, con posesión del 19 de septiembre de 2022.

Que conforme lo dispuesto en el Decreto 0714 del 5 de junio de 2024, fue modificada la estructura y funciones del Ministerio del Interior, estableciendo la Dirección Jurídica como dependencia adscrita al Despacho del Ministro en cambio de la anterior Oficina Asesora Jurídica.

Que como consecuencia de la modificación antes indicada, mediante el Decreto 0715 del 5 de junio de 2024, fue modificada la planta de personal del Ministerio, suprimiendo el empleo de Jefe Oficina Asesora, código 1045, grado 16, creando el empleo de Director Técnico, código 0100, grado 23 de la planta global del Ministerio del Interior.

Que conforme lo establecido en el párrafo del artículo 2 del Decreto 0715 de 2024, a los servidores del Ministerio del Interior actualmente vinculados y que en virtud del presente decreto sean incorporados y/o nombrados en los empleos de la nueva planta de personal no se les aplicarán las disposiciones consagradas en los artículos 2.2.13.2.2, 2.2.13.2.3 y el Parágrafo del artículo 2.2.5.1.3. del Decreto 1083 de 2015.

Que con fundamento en la revisión de los documentos soporte de la hoja de vida de Luz Yolima Herrera Martínez, la Subdirectora de Gestión Humana, certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer el cargo de Director Técnico, código 0100, grado 23 de la planta global en la Dirección Jurídica del Ministerio del Interior, de conformidad con lo señalado en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.

Que por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Nombramiento. Nómbrase con carácter ordinario a Luz Yolima Herrera Martínez, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.100.798 en el cargo de Director

0882

RESOLUCIÓN NÚMERO _____ DE 2024

PÁGINA 2

Continuación resolución "Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en la planta de personal".

Técnico, código 0100, grado 23 de la planta global en la Dirección Jurídica del Ministerio del Interior.


Artículo 2. Comunicación. La Subdirección de Gestión Humana comunicará a través del correo electrónico gestionhumana@mininterior.gov.co, el contenido de esta resolución a Luz Yolima Herrera Martínez.

Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

06 JUN 2024


LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES

Elaboró: Martha Bolívar Reina – Profesional Especializado – Grupo Administración, Registro y Control de Planta de Personal
Revisó: Luz D. Velásquez R. Coordinadora Grupo Administración, Registro y Control de Planta de Personal
Ana María Sabogal Chaves; Subdirectora de Gestión Humana
Eduardo Suarez Tavera- Asesora Secretaria General
Andres René Chaves Fernández – Asesor
Aprobó: Yamel Ruiz Orjuela; Secretario General.

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	VERSIÓN	03
	FORMATO	ACTA DE POSESIÓN. ANEXO 3.	PÁGINA FECHA VIGENCIA	1 de 1 04/08/2023

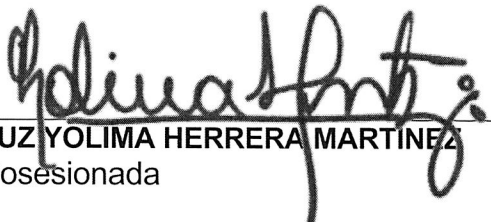
ACTA DE POSESIÓN

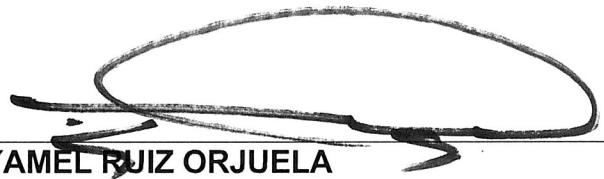
No. _____

En Bogotá D.C., 06 de junio de 2024 se presentó en el Despacho del Secretario General, LUZ YOLIMA HERRERA MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.100.798, con el fin de tomar posesión del empleo de Director Técnico, código 0100 grado 23, ubicado en la Dirección Jurídica, con una asignación básica de \$ 14.901.073, para el cual se nombró con carácter ordinario mediante Resolución No. 0882 del 06 de junio de 2024.

Manifestó bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecidas en las disposiciones vigentes, para el desempeño de empleos públicos.

Acreditó los requisitos para el ejercicio del cargo y prestó juramento de cumplir y defender la Constitución Política de Colombia y desempeñar los deberes que le incumben.


LUZ YOLIMA HERRERA MARTÍNEZ
 Posesionada


YAMEL RUIZ ORJUELA
 Quien da posesión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 79.620.303

ALVAREZ BALLESTEROS

APELLIDOS

SAMUEL

NOMBRES

FIRMA



IMÓVIL DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ENE-1974

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

A+

ESTATURA

G.S. RH

M

SEXO

09-MAR-1992 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER YSSA ROCHA



A-1500150-01400156-M-0079620303-20231127

0137619174A 2

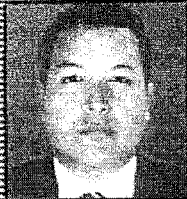

9925671636

297326

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

186605	16/01/2010	11/12/2009	
Tarjeta No.	Fecha de Expedición	Fecha de Grado	
SAMUEL ALVAREZ BALLESTEROS			
79620303	CUNDINAMARCA		
Cédula	Consejo Seccional		
CATOLICA DE COLOMBIA			
Universidad			
Diana Mercedes Lopez Mora Presidenta Consejo Superior de la Judicatura			

6803239

125621

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.